En el último capítulo el autor aborda el tema del desarrollo sustentable, asunto que le preocupó y lo ocupó profesionalmente en los últimos años de su vida. Urquidí nos dice que en los países de la región latinoamericana empezó tarde la concientización colectiva acerca de los problemas ambientales. Antes de 1960 no estaban presentes sino en pequeña medida los factores antropogénicos de deterioro del medio ambiente. Sin embargo, hoy no puede aplazarse ya la atención intensa a estos problemas (p. 519). En los últimos cinco decenios, el deterioro ambiental se ha presentado como problema social y económico agudo, que afecta la salud y pone en riesgo pronunciado la supervivencia de la propia especie humana y de otras especies (pp. 519-520).

El libro de Urquidí es un gran libro. Sin embargo no es de lectura fácil, a pesar de su prosa sencilla y cuidada. Es un libro para iniciados. Son 525 páginas de denso análisis económico con matices y bifurcaciones y, además, con muchos números.

Pero, por otra parte, el libro, como el propio autor dice, no es “para economistas de altos vuelos que se interesan sólo en las etapas de posgrado, con grandes refinamientos técnicos de análisis. Tampoco es una historia económica, sino un análisis de las políticas de desarrollo. Es un libro que puede ilustrar al estudiante, a la sociedad civil, al sector empresarial y al mismo sector político y de gobierno, así como a la opinión pública” (pp. 20 y 21).

El libro tiene un valor adicional para quienes fuimos estudiantes universitarios de ciencias sociales durante los años cincuenta y sesenta: un sabor a melancolía. Es la herencia que nos deja el último de la vieja guardia cepalina.

MARIO OJEDA GÓMEZ

Emilio Zebadúa, *Manual del “fair play”. Guía ética para la política*, México, Fondo de Cultura Económica (“Colección Popular”, núm. 659), 2005, 95 pp.

En los diferentes puestos que ha ocupado Emilio Zebadúa (consejero electoral del IFE, secretario de Gobierno de Chiapas y diputado federal), cada una de sus decisiones y acciones han estado precedidas por un diagnóstico o seguidas de una reflexión. Todo ello sin desligarse de una concepción teórica que es fruto tanto de la academia como de la lectura sistemática de textos de ciencias sociales, y, en el caso de la reflexión, enmarcada ésta en el contexto más amplio de la política, el derecho, la economía y la historia de México.

Este libro es el resultado de ese quehacer político y de ese proceso cotidiano y dialéctico de reflexión intelectual que el autor ha llevado a cabo durante los últimos diez años. Uno de sus propósitos es el de ayudar a quienes de alguna u otra forma participan en la vida pública, que se den cuenta, sobre todo los funcionarios y servidores públicos, de que sus decisiones y acciones afectan a la sociedad en su conjunto, involucran razones de carácter ético y tienen causas que se inscriben en la realidad del país. Para aquellos que ejercen de otra forma la política o reflexionan sobre ella, el texto pretende ser una guía en materia de ética para la política con un propósito didáctico y formativo.

El tema de la ética es central para el autor; regresa a él en innumerables ocasiones a lo largo del texto y reconoce que su manual contiene una propuesta enmarcada por el análisis.

Esta reflexión parte de la premisa de que en política “no todo se vale” y que detrás de la decisión o acción de un actor político se encuentra una concepción de lo ético, fundada en valores sobre lo que está bien y lo que está mal, y sobre las consecuencias de acciones y decisiones concretas.

El autor lleva más allá la esfera de influencia de la ética en la política, sosteniendo que en la elaboración de políticas gubernamentales se encuentra (explícita o no) una visión sobre un orden moral público. Incluso en la impartición de justicia el juez incorpora su concepción ética y política al momento de juzgar y dictar sentencias.

Max Weber aceptaba la guerra entre los dioses, entre los pueblos, entre los hombres, pero le temía a un mundo en donde todos engañaran, hicieran trampa. Para él, se trataba de que cada quien escogiera su ideal y combatiera con banderas desplegadas. De la misma forma, Zebadúa plantea como una obligación asumir una posición éticamente fundada para beneficio de la política democrática.

Coherente con esta idea, el autor afirma que su texto pretende ser “una guía de ética aplicada para entender y actuar en la política desde una perspectiva y una posición progresistas” (p. 17). Esto, partiendo del supuesto o aceptando que México está inserto en un mundo globalizado, integrado en Norteamérica y que es un Estado de derecho que emana de la Constitución liberal de 1917. Así, ni tratado ni manual de operaciones, el texto quiere ser ejemplo y guía de un actuar ético en la política.

Y aspira a ello porque en los últimos 25 años ha habido un esfuerzo enorme, tanto material como intelectual, de parte de quienes detentan el poder por erradicar la ética de la política y de la economía. “La expulsión (o, al menos, la marginación) de la ética del ámbito de la política permite —que no justifica— decisiones gubernamentales que son contrarias al bienestar de la población o que vulneran directamente los intereses de algún grupo específico” (p. 20).

Para el autor, esta separación ha tenido consecuencias nefastas para América Latina; la ha llevado a una crisis que comenzó en los años setenta, tocó fondo en los ochenta y que se intentó resolver con la adhesión a los preceptos y medidas del Consenso de Washington, el cual ha aplicado medidas de política económica que alteran drásticamente la relación entre el Estado y los mercados, tanto nacionales como internacionales.

Ante esta evolución, o regresión en muchos aspectos e indicadores, el método de acción de las fuerzas progresistas no ha cambiado desde finales de los años sesenta y principios de los setenta: la lucha electoral dentro del marco legal y constitucional.

Los resultados de esta evolución también parecerían haber dejado sin sentido las confrontaciones ideológicas que dominaron la mayor parte del siglo XX; la sombra de Fukuyama se pasea libremente por esta sección. Sin embargo, y con toda razón, el autor nos recuerda que la expresión más clara de la necesidad y justificación de un proyecto progresista, en el actual periodo histórico, es la distribución inequitativa de la riqueza y del ingreso entre regiones, países y clases sociales.

Aun reconociendo la importancia del mercado y la necesidad de actuar en y sobre él, el simple hecho de que en la realidad sea imperfecto abre la puerta a la izquierda política. Incluso en la concepción más ortodoxa del libre mercado hay un espacio para corregir las desigualdades e ineficiencias; ese espacio debe ser cubierto con el desarrollo del proyecto progresista.

El autor retrata los rasgos esenciales de esa globalización o mundialización que tantos cambios ha producido en el último cuarto de siglo. Comienza constatando que, a pesar de la enorme concentración de riqueza, incluso en los países desarrollados hay muchos atrasos: diferencias enormes en el acceso a la información, al conocimiento, a la tecnología, mientras que se presenta una situación precaria en cuanto a los derechos humanos, el medio ambiente, los grupos vulnerables, etcétera.

La globalización es una realidad tangible que obliga a replanteamientos teóricos y pragmáticos de la actuación política. Incluso los que están satisfechos con ella reconocen que un capitalismo global sin ningún fundamento en la ética, esto es, sin un análisis normativo de la economía, genera el riesgo de que el mercado se devore a sí mismo.

¿Pesimismo?, ¿fatalismo? El propio autor ofrece algunas cifras que desalentarían al más optimista: 20% de la población más rica del planeta concentra 86% del producto mundial bruto, se beneficia con 82% del comercio exterior total y disfruta de 65% de la inversión extranjera directa. Por otra parte, al 20% más pobre del mundo le corresponde sólo 1% de cada rubro (p. 28).

Esta globalización y sus malestares le imponen a México un desafío tanto político como económico. En los últimos años ya le ha impuesto car-

gas severas que, aunadas a procesos internos, desembocan en un diagnóstico de nación nada alentador: desempleo, economía informal, elevadas tasas de interés, especulación que vuelve más difícil la inversión productiva, pobreza, alta criminalidad, etc. La única realidad económica que los mexicanos menores de 40 años han conocido y conocen es la de crisis estructural o la de crisis cíclicas.

Más allá del desgaste de las relaciones económicas, políticas y sociales en que se sustentaba un tipo de sociedad que creía en el "progreso", la gran constante del siglo es la tremenda desigualdad en todos los sentidos, y de manera absoluta, que caracteriza a la población.

Tras al menos 60 años de vigencia del antiguo régimen y casi un sexenio de alternancia política en el Ejecutivo federal, es tal la brecha económica y social que separa a los mexicanos, que las distintas clases han dejado de compartir la idea de nación que durante un tiempo unió a todos (o al menos no los separó).

En el ámbito de la política, hay la impresión de que los mecanismos de toma de decisiones son "ineficientes" y conducen a la parálisis y a la imposibilidad de llegar a acuerdos. "La incapacidad del sistema político de ofrecer soluciones justas y duraderas al constante deterioro de la vida económica ha desgastado la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas" (p. 35).

Una paradoja subyace en estas dos realidades y es la que se manifiesta en el debate nacional: por una parte, hay consenso sobre la falta de funcionalidad, no de la estructura del Estado, sino de la propia política (el quehacer político cotidiano, relaciones entre poderes y niveles de gobierno); y por otra, hay paz social, la ley se aplica más o menos de manera estricta y se vive una dinámica de relativo orden público.

Para encontrar las razones de esta disfuncionalidad, el autor emprende una revisión de la historia reciente de México. Comienza con el "milagro mexicano" o desarrollo estabilizador, periodo comprendido entre 1958 y 1970 en el que se instaló un régimen político y económico que le ha dado a México el ciclo de mayor crecimiento y bonanza; este crecimiento, además, iba aparejado de una baja inflación. En el ámbito de la política, el gobierno se benefició de un acuerdo entre el capital y el movimiento obrero.

Después de 1982 se da un cambio de modelo, primero gradual y después brutal. A diez años de la firma del TLCAN, de toda la nueva inversión, 90% se ha concentrado en cuatro estados, de los cuales tres se sitúan en el norte. Las entidades del norte han crecido diez veces más rápidamente que las del sur.

En todo caso, nos dice el autor, mientras no haya una historia del México contemporáneo que proporcione un diagnóstico objetivo y conclu-

yente de las crisis de las dos o tres últimas décadas, y que establezca responsabilidades, el Estado se seguirá conduciendo de forma antiética.

Para Zebadúa, el proceso que ha llevado al enorme desgaste que han sufrido las instituciones podrá comenzar a revertirse, si acaso, cuando se reintroduzca la ética en la política y la economía.

La evolución política reciente de América Latina ofrece una oportunidad para ello, pues hay espacios que se están abriendo. Después de que durante los años noventa la mayor parte de la región vivió bajo la alianza de centro-derecha y derecha que aplicó las políticas económicas contenidas en el Consenso de Washington, esta alianza se ha ido desgastando y se han producido giros hacia la izquierda. Este fracaso de las políticas neoliberales conservadoras ha abierto una "ventana de oportunidad" para la izquierda, le ha abierto posibilidades políticas, aunque con un margen reducido, para un giro gradual y moderado. Las recientes elecciones en Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia parecen confirmar esta tendencia.

Entre los temas a los que tendría que hacer frente esta nueva ola de progresismo en América Latina están la corrupción y el respeto de la ley. Mientras que la teoría liberal presume la neutralidad del Estado, en realidad los funcionarios conservan una gran discrecionalidad para asignar proyectos, programas y contratos, lo cual distorsiona los intercambios que realizan de forma cotidiana múltiples actores económicos. Las formas en que se manifiesta esta discrecionalidad o corrupción son muy variadas.

Sobre la aplicación de la ley, Zebadúa recuerda las palabras de James Madison cuando afirmaba que el poder era expansión y que por lo tanto había que ponerle límites. Sin embargo, no basta con que éstos estén plasmados en la Constitución; hacen falta mecanismos permanentes que sean a la vez democráticos e institucionales.

El punto de arranque de cualquier proceso de transformación democrática está en el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad. En México, la extensa red de normas administrativas sirvió para mantener controlados a mandos medios y a ciudadanos comunes; para la alta burocracia y la élite política, sirvió como mecanismo para tolerar la corrupción y el abuso de autoridad. La ley aparece como instrumento punitivo y de control político.

Más allá de discusiones, por ejemplo, de si hace falta una nueva Constitución o no, debería haber acuerdo, al menos, en que exista una exigencia mínima sobre el funcionamiento de la política: todos los actores interesados en hacer política deberían comprometerse con la ley, entendida ésta como frontera para la actuación, como instrumento de decisión, como árbitro para dirimir controversias.

La revalorización de la ley en el Estado mexicano tiene que encuadrarse en los términos en que se concibe y desarrolla la política actual, esto es, en

el aparente consenso sobre la democracia como el sistema de mejores oportunidades en términos de libertades.

A este respecto, hay quienes afirman que no se puede calificar (o descalificar) la democracia mexicana por fenómenos políticos concretos (la situación en Chiapas, el voto de los mexicanos en el extranjero) o por el sentido en que fallan las instituciones. Hay otros que afirman que no existe un marco legal o institucional verdaderamente democrático, sino que todo se deriva de una serie de relaciones de fuerza, producto de la política.

La resolución de esta cuestión es importante, pues la concepción de la democracia define la forma en que autoridades y ciudadanos se relacionan con las leyes. Igualmente importante es la cultura democrática; Zebadúa la define como "el espacio o el ambiente, y también el prisma, a través del cual los ciudadanos conciben y entienden sus derechos y obligaciones y las autoridades realizan la lectura de las leyes y de los códigos" (p. 85). El grado de desarrollo de la cultura democrática de una sociedad también determina la forma en que se materializa el Estado de derecho frente a situaciones concretas.

El autor deja planteadas una serie de preguntas que todos los involucrados en la política deberían tener siempre en cuenta: la situación que prevalece en la política, ¿es producto de elementos estructurales o mayormente cultural?; ¿se trata de una discusión sobre el diseño estructural de la política o de una cuestión de relación de fuerzas, agendas y preferencias electorales?; ¿en qué sentido debe ir la relación entre reformas y objetivos de políticas buscadas?

No obstante, más allá de estas discusiones y de las conclusiones a las que se puede llegar, se presenta nuevamente la discusión de la ética y del papel de la misma en la actuación cotidiana de funcionarios y autoridades. Es tan clara esta presencia que el autor se pregunta, haciendo una analogía con el fútbol: ¿por qué se introduce el concepto de *fair play* si existe un reglamento? Porque, tanto en el fútbol como en la política, no se trata de una aplicación textual o acrítica de la norma, sino de una interpretación a la luz de una idea del fútbol y de la política.

Finalmente, Zebadúa establece los que deberían ser los ejes de una política progresista sustentada en principios éticos y políticos: sin un programa alternativo de finanzas públicas, política energética, estabilidad macroeconómica y combate a la pobreza no se puede pretender, a la vez, gobernar y cambiar a la sociedad.

El autor nos recuerda que el problema fundamental de México (y del mundo) es la creciente pobreza, además de los índices de desigualdad en el ingreso y en la riqueza. Todo ello incrementa una volátil polarización entre países, sectores y clases sociales.

Ante este escenario, todo aquel cuya posición sea progresista tiene la tarea, la responsabilidad y la oportunidad de responder a los tiempos modernos. No puede hacerlo con la memoria de las batallas anteriores. El reto es recuperar el optimismo y generar un ideal en el cual la gente pueda creer; el reto es actuar con planteamientos y propuestas de política reformulados y actualizados.

Así, hemos visto que este manual, y los apuntes que lo conforman, son un modo de concebir la política contemporánea en México y de actuar en ella; constituyen el bosquejo de un proyecto mayor que el autor anuncia como una teoría general sobre la política y la ética en México. Después de este manual, esperamos con entusiasmo esa obra.

FÉLIX G. MOSTAJO